

LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA BÚSQUEDA
DE
NUEVOS ENFOQUES Y SOLUCIONES EFECTIVAS, EN EL DESARROLLO E
IMPLEMENTACION DE POLITICAS PARA ATENDER EL PROBLEMA MUNDIAL DE
LAS
DROGAS EN LAS AMÉRICAS

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2014)

RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 2556 (XL-O/10), AG/RES. 2621 (XLI-O/11), mediante las cuales hizo suyos la Estrategia Hemisférica sobre Drogas y el Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas 2011-2015;

REAFIRMANDO los compromisos hechos en la Declaración de Antigua Guatemala “Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas”; en particular los que alientan al abordaje de nuevos enfoques sobre el problema mundial de drogas en las Américas basado en el conocimiento y la evidencia científica, avanzando de manera coordinada en la búsqueda de soluciones efectivas al problema mundial de las drogas bajo un enfoque integral, fortalecido, equilibrado y multidisciplinario, con pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, que incorpore la salud pública, educación, e inclusión social, junto a acciones preventivas para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, así como el impulso del desarrollo local y nacional;

TOMANDO NOTA del “Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas”;

REAFIRMANDO que afrontar el problema mundial de las drogas es una responsabilidad común y compartida que debe encararse en un marco multilateral, exige un enfoque integral y equilibrado y debe llevarse a cabo de plena conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y otras disposiciones del derecho internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración y el Programa de Acción de Viena sobre derechos humanos y, en particular, respetando plenamente la soberanía y la integridad territorial de los Estados, el principio de no intervención en sus asuntos internos y todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, y tomando como base los principios de igualdad de derechos y respeto mutuo”;

REAFIRMANDO TAMBIÉN que todas las personas son iguales ante la ley y gozan de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni cualquier otra;

Reconociendo la importancia de que el Poder Judicial, el Ministerio Público, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario y otros organismos del Estado desarrollen y fortalezcan capacidades necesarias para responder eficazmente, mediante acciones de prevención y de represión legítimas del crimen y la violencia;

Reafirmando que las políticas orientadas hacia el problema mundial de las drogas, relacionados con la reducción de la oferta y medidas de control, deben respetar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, los cuales consideran, entre otros, el uso de la fuerza en forma ilegal y arbitraria incompatibles con la consecución del bien común y estado de derecho en una sociedad democrática e injustificable en nombre de la prevención y el control del crimen y de la violencia;

RECONOCIENDO que el problema mundial de las drogas, incluidos sus costos políticos, económicos, sociales y ambientales, se ha convertido en un desafío cada vez más complejo, dinámico y multi-causal que genera efectos negativos en la salud, en la convivencia social, seguridad ciudadana, en la integridad de las instituciones democráticas, las políticas públicas, el desarrollo y las actividades económicas y que, bajo el principio de responsabilidad común y compartida, requiere un abordaje integral, equilibrado, multidisciplinario y construido sobre un marco de pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

DESTACANDO que la problemática no se agota en la oferta y demanda de drogas y en el lavado de activos, sino que el problema mundial de las drogas puede contribuir y ser exacerbado por problemáticas estructurales de orden social;

CONMOVIDOS por las numerosas vidas humanas perdidas y truncadas y el gran sufrimiento causado por el problema mundial de las drogas;

CONVENCIDOS que las políticas sobre reducción de la demanda de drogas ilícitas deben centrarse en el bienestar del individuo y su entorno, para que desde un abordaje multisectorial y multidisciplinario, utilizando evidencia científica y mejores prácticas disponibles, se basen en enfoques para mitigar los impactos negativos del uso indebido de drogas, y afiancen el tejido social y fortalezcan la justicia, los derechos humanos, la salud, el desarrollo, la inclusión social, la seguridad ciudadana y el bienestar colectivo;

REITERANDO la necesidad de fortalecer las instituciones del Estado y sus políticas públicas y estrategias de inclusión social, en particular las de educación, salud, y seguridad ciudadana, para la mejor prevención del uso indebido de drogas, la violencia y los delitos asociados a las drogas, con pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales;

REITERANDO también, la importancia de una mayor asignación de recursos públicos y privados para la implementación de programas de prevención, tratamiento, rehabilitación, y reinserción social;

REITERANDO asimismo, en este sentido la importancia de políticas públicas de inclusión social;

RECONOCIENDO que las experiencias y nuevos enfoques que distintos gobiernos y sociedades han desarrollado en relación al problema mundial de las drogas pueden ser fuente de aprendizaje global para la evolución de las actuales políticas de drogas;

COINCIDIENDO en que entre los efectos más evidentes y dañinos del uso indebido de drogas es la ruptura de lazos sociales, haciéndose necesario considerar la promoción de políticas que se centren en el ser humano, fortalezcan esos lazos y permitan que las personas comiencen y continúen con sus proyectos de vida, en términos de inserción laboral y profesional, constitución de una familia, desarrollo en sociedad, entre otros;

REAFIRMANDO que las políticas de drogas deben contener una perspectiva transversal de derechos humanos, consistente con las obligaciones de las partes conforme al derecho internacional, así como también deben ser diseñadas e implementadas con un enfoque de género, con el fin de promover y lograr el bienestar de la persona, su inclusión social, el acceso a la justicia y a la salud, entre otros;

REAFIRMANDO TAMBIÉN nuestro compromiso de alentar un amplio y abierto debate sobre el problema mundial de las drogas para que todos los sectores de la sociedad participen y continúen, según sea el caso, ofreciendo su experiencia y conocimiento de los diversos aspectos del fenómeno para contribuir así al fortalecimiento de las estrategias nacionales, como elemento fundamental para la eficacia de las políticas públicas; y

TOMANDO EN CUENTA el compromiso de los Estados de iniciar un proceso de consultas, teniendo como base la Declaración de Antigua, el cual se llevará a cabo, entre otras, en las siguientes instancias a nivel nacional, en grupos regionales multi-disciplinarios, en el marco de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), en la reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas celebrada en Medellín Colombia en noviembre de 2013, en las reuniones especiales coordinadas por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos con otros organismos y entidades regionales,

RESUELVE:

1. Reafirmar que las políticas de drogas deben realizarse con el pleno respeto de las leyes nacionales y el derecho internacional, incluyendo el debido proceso, y de irrestricto respecto de los derechos humanos, que abarcan sus obligaciones con respecto a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como a las instituciones democráticas para promover y preservar el Estado de derecho, las libertades y valores democráticos en el Hemisferio.

2. Reafirmar el compromiso de continuar avanzando de manera coordinada en la búsqueda de soluciones efectivas al problema mundial de las drogas con un enfoque integral, equilibrado y multidisciplinario en el marco del pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales y que están directamente relacionadas con el derecho de las personas a vivir con dignidad, por lo que tienen como fin promover y lograr el bienestar de la persona, su inclusión social, su acceso a la justicia, a la educación y la salud junto a acciones preventivas para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, así como el impulso del desarrollo local y nacional.

3. Reafirmar que todos los Estados Miembros tienen el deber de garantizar que todas las medidas adoptadas para abordar el problema mundial sobre las drogas se ajustan a sus obligaciones de conformidad con el derecho internacional.

4. Instar a los Estados a que, en sus políticas de drogas, orientadas hacia el problema mundial de las drogas cumplan plenamente sus obligaciones, de conformidad con el derecho internacional aplicable, en lo referente a [BR: la prohibición de] tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, destacando en particular, la absoluta prohibición de la tortura, incluyendo, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

5. Alentar a los Estados miembros a considerar políticas que promuevan una atención socio-sanitaria adecuada de aquellas personas privadas de su libertad, incluidas las que hacen uso indebido de drogas).

6. Invitar a la CIDH a que continúe promoviendo el respeto y la defensa de los derechos humanos apoyando los esfuerzos de los Estados Miembros que así lo soliciten para cumplir debidamente sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos cuando desarrollen y ejecuten medidas para enfrentar el problema mundial sobre las drogas y que preste atención a los efectos eventuales negativos de los derechos humanos.

7. Solicitar igualmente a la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) que continúe prestando atención a los efectos que pudieran derivarse de las políticas para enfrentar el problema mundial de las drogas para los derechos de la mujer.

8. Solicitar a las Secretarías Ejecutivas de la CIDH, de la CIM y de la CICAD, así como de otras áreas pertinentes de la OEA que establezcan y fortalezcan su colaboración permanente incluso en lo referente al tema de la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, los derechos de las mujeres, en la adopción de medidas

o políticas para abordar el problema mundial sobre las drogas, incluyendo la instrumentación de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas y el Plan de Acción 2011-2015.

9. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva de la CICAD, en estrecha coordinación con las de la CIDH y la CIM, que convoquen a una reunión de expertos gubernamentales a fin de intercambiar experiencias nacionales, buenas prácticas en la adopción de políticas integrales hacia las drogas, bajo la perspectiva de los derechos humanos, a fin de presentar un documento con recomendaciones, que sirva como insumo para el Consejo Permanente de la OEA, en el primer semestre del año 2015, de acuerdo a los recursos disponibles.

10. Solicitar a la Secretaría General que, con el apoyo de los Estados miembros realice las acciones necesarias para lograr la implementación de la presente resolución.